



## Resolución de Superintendencia

N° 1102 -2018-SUCAMEC

Lima, 04 DIC 2018

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto el 19 de octubre de 2018 por el señor Walter Santos Huilca, contra el Oficio N° 13498-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 24 de setiembre de 2018, el Memorando N° 2941-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 25 de octubre de 2018, el Dictamen Legal N° 00494-2018-SUCAMEC-OGAJ de fecha 30 de noviembre de 2018, y;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127 se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, el literal t) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-IN y modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN, establece como una de las funciones del Superintendente Nacional resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra actos administrativos emitidos por los órganos de línea y desconcentrados de la SUCAMEC;

Que, el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – TUO de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece que: *“El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas ofrecidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho (...);”*

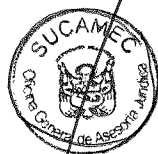
Que, con Registro N° 201800267049 de fecha 20 de julio de 2018, el señor Walter Santos Huilca (en adelante, el administrado) solicitó a la SUCAMEC la emisión de licencia de uso de armas de fuego en la modalidad de defensa personal;

Que, mediante Oficio N° 13498-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 24 de setiembre de 2018, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos (en adelante, la GAMAC) denegó la solicitud de licencia inicial de uso de arma de fuego, dando por finalizado y archivando el procedimiento, señalando que a través de la Resolución de Gerencia N° 01640-2017-SUCAMEC-GAMAC, de fecha 17 de abril de 2017, se cancelaron sus licencias de posesión y uso Nos. 65547 y 368292 por registrar antecedentes históricos de condena por delito doloso; asimismo, en dicha resolución se dispuso el internamiento definitivo de las armas de fuego con series Nos. DR18214 y H019383, además de disponer la incorporación de los datos del administrado en el registro de inhabilitados de la SUCAMEC;

Que, el día 19 de octubre de 2018, el administrado interpuso recurso de apelación contra el Oficio N° 13498-2018-SUCAMEC-GAMAC, solicitando que el mismo se deje sin efecto, para lo cual señala que es nulo de pleno derecho. Asimismo, señala que se ha desestimado su solicitud de emisión de licencia de uso de arma de fuego sustentándose en el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 30299 en concordancia con el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 010-2017-IN;



J. DULANTO



VºBº  
C. Verástegui

Que, además, según el administrado existe duplicidad de sanciones administrativas y penales, lo cual vulneraría el principio de NON BIS IN ÍDEM; también alega que se encuentra rehabilitado de la sanción penal que el juzgado le impuso, añadiendo que según los artículos 69 y 70 del Código Penal, producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativas a la condena impuesta no pueden ser comunicados a ninguna entidad o persona; precisa, además, que se encuentra rehabilitado mediante resolución judicial, la cual ordena la cancelación de sus antecedentes y que lo acredita con la copia de los certificados que en su oportunidad presentó, donde se demuestra que actualmente no tiene ningún tipo de antecedente. Igualmente, señala que existe una sola posibilidad de la aplicación retroactiva de la norma (en el caso penal), y ésta se da por efectos del artículo 103 de la Constitución, indicando el administrado que *"en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera"*;

Que, también sostiene que la SUCAMEC estaría intentando apropiarse de un bien propio que no le pertenece al haberse ordenado el internamiento definitivo del arma de fuego y que esto va en contra del principio constitucional establecido en el inciso 16 del artículo 2 de la Constitución sobre el derecho a la propiedad y a la herencia, así como también en el artículo 70, sobre la inviolabilidad del derecho de propiedad;

Que, en virtud del Principio de Legalidad contenido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"*;

Que, el artículo 103 de la Constitución Política del Perú señala que *"Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo (...)"*; asimismo, el artículo 109 de nuestra Norma Fundamental establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte;

Que, en relación a la irretroactividad alegada por el administrado cabe señalar que en el sustento 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC se establece que *"en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)"*. Así, tenemos que para toda consecuencia jurídica se debe tener presente la regulación constitucional sobre la aplicación de las normas en el tiempo pues ésta, de manera general, se encuentra prevista en el artículo 103 de la Constitución en los términos siguientes: *"La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo"*. Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone que *"La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte"*;

Que, a partir de estas disposiciones normativas se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir, que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial y se aplica a las consecuencias de las relaciones



J. DULANTO



VºBº

C. Norberto



## Resolución de Superintendencia

y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición expresa de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte, o que permite que la legislación precedente siga produciendo efectos de manera ultractiva. Entonces, como regla general, la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, lo que incluye a aquellas surgidas bajo la legislación anterior y que aún produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción mediante reglas de derecho transitorio, a efectos de facilitar el tránsito de un régimen legal a otro nuevo;

Que, en ese sentido, en concordancia con los artículos 103 y 109 de la Constitución, la Ley N° 30299 publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de enero de 2015, entró en vigencia a partir del 6 de julio de 2016, siendo ésta de obligatorio cumplimiento, generando en el ordenamiento jurídico los efectos vinculatorios de las normas y preceptos jurídicos. Por tanto, dicha Ley como su Reglamento generan en el ordenamiento jurídico los efectos vinculatorios de las normas y preceptos jurídicos, por lo que todo procedimiento iniciado a partir de la fecha mencionada, se regirá por la Ley N° 30299 y su Reglamento;

Que, en cuanto a la normativa aplicable al presente caso, una de las condiciones para el procedimiento de otorgamiento y renovación de licencias es la establecida en el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil (en lo sucesivo, la Ley), el cual establece que para obtener y renovar las licencias o autorizaciones otorgadas conforme a la citada Ley, las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas deben cumplir, entre otras, con la siguiente condición: "b) No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito doloso, aun en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena";

Que, asimismo, el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299 (en lo sucesivo, el Reglamento) establece respecto a la condición para la obtención y renovación de licencias y autorizaciones lo siguiente: "No contar con antecedente penal por delito doloso se refiere a que el solicitante de una autorización o licencia ante la SUCAMEC, no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos. Conforme lo dispone el literal b) del artículo 7 de la Ley, la rehabilitación regulada por los artículos 69 y 70 del Código Penal no resulta aplicable para la evaluación y consultas a cargo de la SUCAMEC" (subrayado nuestro);

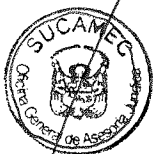
Que, el artículo 42 del Reglamento refiere que "la SUCAMEC deniega o desestima la solicitud de licencia de uso de arma de fuego cuando el solicitante no cumpla con las condiciones o requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento";

Que, además, resulta pertinente indicar que de acuerdo con el numeral 22.6 del artículo 22 de la Ley N° 30299, en el ejercicio de sus potestades de control, fiscalización o sanción, la SUCAMEC está facultada para disponer la cancelación o suspensión de licencias de uso de armas de fuego cuando se incumpla con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley N° 30299;

Que, como señala la GAMAC en el oficio impugnado, a fin de evaluar la solicitud de emisión de licencia presentada por el administrado, ha advertido que sus licencias de posesión y uso fueron canceladas mediante Resolución de Gerencia N° 01640-2017-SUCAMEC-GAMAC, de fecha 17 de abril de 2017, por registrar antecedentes históricos de condena por delito doloso, por lo que,



J. DULANTO



VºBº  
Asistente

bajo el contexto normativo antes descrito, al determinarse que el administrado figura en el citado registro, se incumplió con el requisito de otorgamiento y renovación de licencias establecido en el literal b) del artículo 7 de la Ley y en el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento; razón por la cual la GAMAC, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado numeral 22.6 del artículo 22 de la Ley N° 30299, dispuso la cancelación de las licencias de uso de armas de fuego del administrado; del mismo modo, en concordancia con el artículo 29 de su Reglamento, con la cancelación de las licencias, el titular pierde la autorización y porte de armas de fuego, encontrándose obligado a depositar las armas de fuego de manera definitiva en los almacenes de la SUCAMEC;

Que, por tanto, en cuanto a lo referido por el administrado en relación a que la denegatoria de licencia se sustenta en el inciso 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 010-2017-IN y la Ley N° 30299, al respecto, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, cabe indicar que la GAMAC aplicó la Ley N° 30299 y su Reglamento, en estricto cumplimiento del Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, el cual dispone que toda actuación de la Administración siempre debe estar enmarcada dentro de una norma legal autoritativa que la faculte a realizar determinada acción administrativa, dado que los sujetos de derecho público solo pueden hacer aquello que está expresamente permitido y atribuido por las normas que regulan su competencia, en este caso, la Ley N° 30299 y su Reglamento;

Que, además, respecto a la rehabilitación a la que hace referencia el administrado, cabe precisar que si bien es cierto toda persona condenada, luego de cumplir sentencia condenatoria en su contra, se le devuelven sus derechos suspendidos o restringidos, también es cierto que la figura del cumplimiento de condena conocida como "rehabilitación" no es causal eximente para no acatar la condición estipulada en el literal b) del artículo 7 de la Ley y en el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento, referente a que el solicitante de emisión de licencia para portar arma no debe figurar en el Registro Nacional Histórico de Condenas del Poder Judicial, no resultando aplicable para su evaluación la figura de la rehabilitación, ello teniendo en consideración que el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento señala expresamente que "(...) *la rehabilitación regulada por los artículos 69 y 70 del Código Penal no resulta aplicable para la evaluación y consultas a cargo de la SUCAMEC*"; si bien el administrado hace referencia a que los Certificados de Antecedentes Penales y Judiciales señalan que no tiene antecedentes, este alegato no resulta atendible pues ha quedado acreditado que figura en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial; al respecto, cabe precisar que la condición estipulada en el citado numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento es una condición distinta a la de "no registrar antecedentes penales";

Que, con relación a lo alegado por el administrado de que se estaría vulnerando el principio del "NON BIS IN ÍDEM", donde determina una interdicción de duplicidad de sanción administrativa y penal, cabe señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 1670-2003-AA/TC, ha establecido que: "(...) *El principio no bis in ídem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado (...)*";



J. DULANTO



VºBº



## Resolución de Superintendencia

Que, en ese entender, se puede apreciar que la GAMAC desestimó la solicitud de emisión de licencia de uso de arma de fuego, toda vez que el administrado ya cuenta con resolución de cancelación de licencias por contar con delito doloso, para lo cual se siguió el procedimiento establecido en la normativa vigente, pues en el ejercicio de sus potestades de control, fiscalización o sanción, la SUCAMEC está facultada para disponer la cancelación de licencias de uso de armas de fuego cuando se incumpla con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley N° 30299, en este caso en particular, el administrado incumplió lo dispuesto en la Ley N° 30299 (literal b del artículo 7) y el Reglamento (inciso 7.1 del artículo 7), los cuales señalan como condición para la obtención y renovación de licencias y autorizaciones: **No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito doloso, aun en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena y no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos**; por lo tanto, el procedimiento administrativo seguido por la SUCAMEC es totalmente distinto al proceso judicial que se le siguió por delito doloso; en tal sentido, en el presente caso no se ha afectado el principio de NON BIS IN IDEM;

Que, lo referido por el administrado en relación a que *"...de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera..."*, cabe indicar que a través de la sentencia STC N° 4293-2012-PA/TC emitida el 18 de marzo de 2014, el Tribunal Constitucional resolvió dejar sin efecto el precedente vinculante contenido en la STC N° 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se establecía que: *"Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38º, 51º y 138º de la Constitución"*; en tal sentido, la SUCAMEC no se encuentra facultada para inaplicar la Ley N° 30299, ni le corresponde determinar la inconstitucionalidad de la misma;

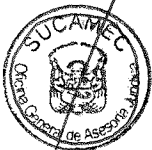
Que, por otro lado, cabe indicar que no existe violación alguna sobre el derecho de propiedad del administrado, puesto que la SUCAMEC actúa conforme a la potestad otorgada por la Ley N° 30299, siendo que en el presente caso se ha dispuesto el internamiento definitivo de dicha arma, al amparo del artículo 41 de la referida Ley, que a la letra dice: *"La SUCAMEC decide el destino final de las armas de fuego, municiones y materiales relacionados incautados, decomisados, (...) optando por su asignación para el servicio de la Policía Nacional del Perú, la venta vía subasta o remate, su donación a los clubes de tiro debidamente acreditados o museos cuando las características del arma incautada lo amerite. En caso contrario son destruidos"*;

Que, finalmente, cabe precisar que la GAMAC desestimó la solicitud de emisión de licencia de uso de arma de fuego presentada por el administrado en virtud del artículo 42 del Reglamento que señala que *"la SUCAMEC deniega o desestima la solicitud de licencia de uso de arma de fuego cuando el solicitante no cumpla con las condiciones o requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento"*, ya que registra antecedente histórico de condena por delito doloso, siendo por ello que se canceló sus licencias de posesión y uso, en virtud del numeral 22.6 del artículo 22 de la Ley N° 30299;

Que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.1 y 1.4 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, sobre los Principios de Legalidad y Razonabilidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas, por lo que la autoridad administrativa al adoptar sus decisiones debe actuar sin sobrepasar los límites de la atribución conferida por la ley, observando la proporción entre los medios a emplear y los fines públicos bajo



J. DULANTO



VºBº  
Verástegui

su tutela, de tal manera que la decisión tienda a su cometido, ciñéndose estrictamente a la norma legal;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Dictamen Legal N° 00494-2018-SUCAMEC-OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, la denegatoria de licencia dispuesta por la GAMAC se efectuó en el marco de lo establecido por la Ley N° 30299 y su Reglamento, normas vigentes y de obligatorio cumplimiento, habiendo actuado en virtud del Principio de Legalidad, por lo que no se advierte causal de nulidad. Asimismo, considerando lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, el dictamen legal debe ser notificado al administrado conjuntamente con la presente resolución;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto Legislativo que crea la SUCAMEC, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;

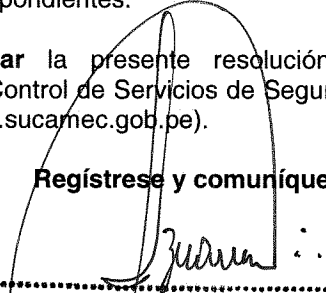
**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.- Declarar desestimado** el recurso de apelación interpuesto por el señor Walter Santos Huilca, contra el Oficio N° 13498-2018-SUCAMEC-GAMAC de fecha 24 de setiembre de 2018, emitido por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, dándose por agotada la vía administrativa.

**Artículo 2.- Notificar** la presente resolución y el dictamen legal al señor Walter Santos Huilca, y poner de conocimiento a la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC para los fines correspondientes.

**Artículo 3.- Publicar** la presente resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC ([www.sucamec.gob.pe](http://www.sucamec.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese.**

  
.....  
**JUAN ALBERTO DULANTO ARIAS**  
Superintendente Nacional  
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,  
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC



Vº  
Veréstegui